JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, diez de noviembre de dos mil veintiuno

Radicado No.	05001310301920210041900
Proceso	Ejecutivo Singular

Al estudiar la demanda presentada por **Sandra Milena Molina Vásquez** en contra de **Ramón Rodrigo García Gil**, el Despacho negará el mandamiento ejecutivo por las razones que a continuación se exponen.

CONSIDERACIONES

1.- Con relación al tipo de tutelas jurídicas que se pueden pretender mediante el proceso Jurisdiccional se plantea que el mismo no se encuentra limitado al reconocimiento y declaración de derechos cuya titularidad o existencia es en principio incierta, sino que, además, mediante un trámite expedito se puede garantizar también el cumplimiento y satisfacción de aquellas obligaciones permeadas de las características de expresas, claras y actual exigibilidad, por cuanto las mismas, de manera correlativa, emanan de unos derechos en principio cierto.

El legislador previó en consecuencia el trámite ejecutivo para el cumplimiento y satisfacción de las referidas obligaciones, las cuales, encontrándose contenidas en un título ejecutivo, provienen de manera directa e inequívoca de una persona a la cual se le atribuyen, que se conoce como deudor y que, contiene sus elementos de forma clara, expresa, encontrándose además en un estado de exigibilidad dado su incumplimiento.

En consecuencia, para acudir al proceso ejecutivo, es requisito sine qua non, que la obligación que se pretende sea satisfecha reúna inescindiblemente las condiciones de expresa, clara y actualmente exigibles, establecidas en el artículo 422 del Código General del Proceso, con independencia del instrumento o título del cual provienen.

Que la obligación sea expresa, implica que en el cuerpo del instrumento conste, exprese o se manifieste por escrito, de forma literal la obligación, excluyendo en consecuencia aquellas que se encuentran revestidas con las connotaciones de implícitas o presuntas, que exigen del Juzgador un grado de interpretación y valoración axiológica respecto de su contenido para proceder a la consecuente admisión del libelo ejecutivo. A su vez, ello implica la claridad que también debe de acompañar al título y a la obligación, que corresponde a que *“(...) Sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con nítida perfección de la lectura del mismo título ejecutivo, en fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse del deudor”*.¹

Igualmente, la obligación debe ser exigible, esto es, que se haya cumplido el plazo o la condición.

En conclusión, la obligación debe ser diáfana y clara, y que de la lectura del documento se pueda colegir con la suficiente nitidez cuál es el componente objetivo o la prestación debida que se le exige a la persona contra la cual se encuentra dirigida el libelo genitor, por cuanto la duda al respecto, conlleva a que, frente a la carencia de tales elementos esenciales, se deba recurrir al trámite declarativo con el fin de otorgarle la suficiente translucidez a los derechos pretendidos para eventualmente exigir su cumplimiento.

¹ Hernán Fabio López Blanco, Código General del proceso Parte Especial, segunda edición, pág. 404.

2. Caso concreto. En el caso objeto de estudio, con el fin de lograr la favorabilidad de su pretensión, la sociedad demandante aportó con la presentación de la demanda copia del contrato de promesa de compraventa de acciones de la compañía Hotels And Suites Operadora de Hoteles S.A.S. (fl. 08 archivo 02 del expediente digital) el cual se encuentra suscrito por las partes en la presente demanda. Igualmente, se aporta un documento denominado “acta especial de constancia” (fl. 11 archivo 02).

Una vez estudiado el caso concreto, debe indicarse que lo reclamado deviene inviable porque el mismo no cumple con las exigencias previstas en el artículo 422 del CGP como pasará a exponerse.

La mencionada norma es clara en señalar que se podrán demandar de manera ejecutiva las obligaciones expresas claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, situación que no se presenta en el caso objeto de estudio, toda vez que el documento aportado no se torna claro respecto a las obligaciones a cumplir.

En lo que respecta al objeto contractual no se encuentra claramente determinado. Se redactó de manera ambigua, y de lo señalado en la cláusula 2 (fr. Archivo 02 F.l 8), no es posible deducir a qué acciones se refiere, simplemente se indicó que la señora Sandra Molina era poseedora del 50% de unas acciones, sin embargo, no se hace referencia de la sociedad donde se encontraban las mismas. Igualmente, se expone que el demandado se obliga a pagar una “Suite”, de la cual únicamente se estipula un precio, pero no se determina claramente en qué consiste lo señalado por las partes como “Suite” y que se comprometen a vender y pagar, sumado a la ausencia plena de identificación de ello. Esta situación que resulta indispensable a la luz del artículo 1611 del Código Civil y que en todo caso resta el carácter ejecutivo del título.

Adicionalmente, se habla de una sociedad sobre la cual recaía la siguiente obligación: *“La sociedad se obliga en este documento a hacer el corte de utilidades a agosto 31 de 20018, incluyendo las utilidades acumuladas de periodos anteriores, las cuales se deben liquidar según la participación correspondiente (...)”* (Cfr. Archivo 02 F.l 08). No obstante, el documento parte de que se obligan como partes contractuales la señora Sandra Milena Molina Vásquez y el señor Ramón Rodrigo García Gil. Esta circunstancia resta claridad a lo que se presenta como título ejecutivo. Esto teniendo en cuenta que “la sociedad”, no se encuentra siquiera identificada y la misma no obra como parte dentro del contrato. Adicionalmente, la obligación que se indica allí condiciona las prestaciones del contrato. Apréciase que en el mencionado escrito se estipuló: *“Cualquier alteración o modificación no acordada a los balances o que involucren gastos o costos que afecten los resultados se entenderá como incumplimiento y se hará efecto para la sanción/ o multa establecida”*. Situación que no permite entrever la existencia de un documento con los requisitos propios del título ejecutivo, aparte que se alude a una sanción por la inejecución sin establecer cual sería la parte pasiva de la misma.

Como se puede apreciar, el objeto del contrato no resulta claro, expreso o exigible, por el contrario, las situaciones planteadas en la cláusula donde se pretendía determinar el mismo, es confusa y crea escenarios indeterminados.

Adicional a lo expuesto y en lo que corresponde al precio fijado se evidencian contradicciones que confirman la falta a los presupuestos esenciales de todo título ejecutivo dentro del documento objeto de análisis por lo siguiente:

En el numeral primero del contrato de promesa de compraventa de acciones de la compañía se estipula que le precio de las mismas es de \$400.000.000 expresando que: “(...) *que el promitente comprador pagará al promitente vendedor de la siguiente manera: la suma de **cincuenta millones de pesos (\$150.000.000)**, 24 de septiembre de 2018*” (Cfr. Archivo 02 F.1 08). Ello se contradice con el acta firmada de forma unilateral en la que se indicó “*hace constar que el promitente comprador se comprometió a pagar al promitente vendedor el día 24 de septiembre de 2018 la suma de **ciento cincuenta millones de pesos \$150.000.000** y ratifica en este documento de acta que dicha suma no se recibió*” (Cfr. Archivo 02 F.1 11). De cara a ello, evidencia este Despacho la tangible incoherencia y oscuro panorama en el que se halla la suma de dinero pactada en este apartado, de ahí que, en letras fue consignado del valor de \$50.000.000, pero en números \$150.000.000, contrario a ello de manera unilateral, se dio por sentado que la suma obligada era de **\$150.000.000**, suma diferencialmente a la pactada en letras; la situación antedicha imposibilita determinar cuál fue la suma pactada realmente dentro del mismo, situando el documento, aún más, en una posición inviable para ser cobrado por vía ejecutiva, dado que deben efectuarse elucubraciones que escapan al contexto propio de la ejecución.

En lo que refiere al perfeccionamiento contractual, se avizora una inconsistencia sustancial entre la cláusula tercera “*firma de acta de venta de acciones*” y la quinta “*perfeccionamiento*”, las cuales tienen idéntico objeto: determinar en qué fecha se perfeccionaría la venta; frente a ello la cláusula tercera refiere: “*se hará en el momento que se cancele la totalidad de la negociación, esto quiere decir el **22 de enero de 2019, en la notaría once (11) del círculo de Medellín a las 2:30 p.m.***” (subrayado y negrilla del Despacho) contrario a ello, en la cláusula quinta se determinó: “*las partes acuerdan que la compraventa prometida se realice el día **catorce (19) de septiembre de 2018, en la notaría diecisiete el círculo de Medellín, a las once y treinta de la mañana (11:00)***”. (Subrayado y negrilla intencional) Por ello no se tiene certeza con ocasión de la forma en la que convinieron las partes.

En ese orden, para el caso en particular, y del documento base de recaudo no se cumplen con los requisitos sustanciales que configuran todo título ejecutivo contenidos en el artículo 422 del C.G. del P., por lo que la ejecución debe ser denegada.

Incluso, de aceptarse el hecho de que el documento aportado pueda constituir por sí solo un título ejecutivo, es necesario resaltar que por tratarse de una obligación surgida de un contrato bilateral no resultaría procedente librar orden ejecutiva, toda vez que para que se configure dicha posibilidad, le correspondería a la parte actora demostrar que las obligaciones adquiridas fueron satisfechas en su totalidad y que por ello se encontraba habilitada para reclamar ejecutivamente una obligación a quien señala como deudor; sin embargo, al momento de presentar la demanda no se aportaron los documentos necesarios donde se constate el cumplimiento efectivo de las obligaciones adquiridas en el contrato celebrado por los extremos contractuales. A esto se suma que en el contrato aducido se establecieron obligaciones en cabeza de una sociedad indeterminada, lo que igualmente conduce al traste de una ejecución.

Sobre la posibilidad de ejecutar este tipo de obligaciones bilaterales el tratadista Hernando Devis Echandía ha expuesto que: “*Cuando el documento contenga obligaciones bilaterales, a cargo unas del ejecutante y otras del ejecutado, sólo procederán la ejecución y las medidas cautelares, si en el mismo documento o en otro que reúna iguales requisitos de autenticidad o prueba sumaria y origen **aparece que el ejecutante cumplió las suyas o que el demandado debe cumplir primero las que son a cargo de él, o si se acompaña confesión en interrogatorio anticipado o inspección judicial en que conste el***

*cumplimiento del primero. Esto se deduce de los artículos 1602 y 1609 del C.C. y del concepto de exigibilidad*².

Sobre este punto el Tribunal Superior de Medellín ha indicado que frente a las obligaciones sometidas a un condicionamiento, la ejecución será posible si se demuestra el cumplimiento de la condición, *“el cual deber estar acreditado, tornándose entonces el título ejecutivo en complejo, pues para que presente tal mérito, debe obrar no sólo el contrato en el que consten las estipulaciones que sobre el particular se pretende hacer valer, sino también la prueba del cumplimiento de sus obligaciones en forma íntegra por parte del ejecutante y el incumplimiento de las suyas por el ejecutado”* (negrillas y subrayado del Despacho). Y continúa puntualizando *“(…) la afirmación que se hace en cuanto a la necesidad de acompañar con el título no sólo la prueba del incumplimiento por parte del deudor, sino también del cumplimiento o allanamiento a hacerlo por parte de quien demanda, deviene de la naturaleza misma de los contratos en los que se pacta la cláusula penal, porque cuando ellos son bilaterales, no resultaría explicable que uno de los contratantes pretenda hacer efectiva la sanción pactada por el incumplimiento de su contraparte cuando el mismo tampoco cumplió o no estuvo presto a cumplirlo”*³. (negrilla y subrayado del Despacho).

Se resalta entonces que la parte demandante no da cuenta del cumplimiento o estado de cada una de las obligaciones adquiridas por cada parte. Téngase presente, que si bien se aporta la denominada acta especial de constancia (fl. 11 Archivo 2) se puede observar que la misma solo es una declaración unilateral realizada por la parte demandante en la que manifiesta que se “deja constancia del incumplimiento del contrato de promesa de compraventa de acciones” situación que por sí sola no satisface la carga que recae sobre la parte activa.

En el presente caso, de superarse la ausencia de claridad del documento que se presenta como título ejecutivo, lo cual no ocurre, la actora tenía la carga específica y contundente de demostrar que las obligaciones adquiridas con el contrato aportado fueron satisfechas en su totalidad y que por ello estaba habilitada para reclamar ejecutivamente una obligación a quien señala como deudor, lo que no se constata. Se aúna que en la promesa de compraventa que se aporta para la ejecución las partes tenían el deber de comparecer a la notaría 11 y a la 17 del Círculo de Medellín para suscribir escrituras, sin que se aporte constancia que dé fe cumplimiento.

Finalmente, la parte ejecutante pretende de forma irrestricta y antitécnica la aplicación del trámite ejecutivo para obligaciones de hacer y para el pago de sumas de dinero, cuando son trámites diferentes. Destáquese que se solicita el pago convenido en el contrato por concepto de acciones y “suite” y se pretende acumular sin una fundamentación clara pretensión de suscribir documentos sin siquiera cumplir un mínimo de rigor para tal efecto. Además, se destaca nuevamente la indeterminación del vocablo “suite”, lo cual repercute igualmente en lo pretendido, dado que no se especifica, tal y como se aprecia en la pretensión cuarta. Además, se alude a la firma de escrituras para la transferencia de acciones sin precisión clara y sin cumplir con los parámetros propios de dicha clase de ejecución.

Así las cosas, como no se encuentran reunidas las condiciones necesarias para la apertura de la vía ejecutiva en los términos anteriormente descritos, y, por ende, imperioso resultará denegar lo solicitado.

² Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal, Tomo III, pág. 345 Primera edición ABC 1972, Bogotá.

³ Tribunal Superior de Medellín, auto del 23 de junio de 2010. M.P Dora Elena Hernández Giraldo

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Juzgado,

RESUELVE:

Denegar el mandamiento ejecutivo por las motivaciones aquí consignadas.

NOTIFÍQUESE
ÁLVARO ORDOÑEZ GUZMÁN
JUEZ

2

Firmado Por:

Alvaro Eduardo Ordoñez Guzman
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 019
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

5bcac38b93a3f7e02e286960097701f98c79498de6e9f403931b57ec233692a5

Documento generado en 10/11/2021 11:07:33 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>